

se les admitiera en pago, en el caso propuesto.

Con los fundamentos indicados y el que prestan los arts. 27, 101 fracc. 1ª y 3ª de la Constitución general é iguales fracciones del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; se resuelve:

La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mondía, contra el acto del ciudadano administrador de la Aduana terrestre de este lugar, por el que se niega á recibirles en moneda de cobre la cantidad de \$166 95 ts. por el último tercio de este año de la contribucion de giro mercantil, y el seis por ciento de recargo que adeudan.

Hágase saber, publíquese la presente en uno de los periódicos de esta ciudad; remítase la copia respectiva al *Semanario Judicial* y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales. El C. Lic. Joaquín García, 2º suplente del Juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó.—Doy fé.—Joaquín García.—Francisco Medina, secretario.

Es copia. Mazatlan, Noviembre 3 de 1874.—Francisco Medina, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México Diciembre 22 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Elorza y Mondía del comercio de Mazatlan, ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan que se niega á recibirles en moneda de cobre, el pago de ciertos derechos, con lo cual creen los promoventes invadida la esfera de la autoridad federal; visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal, y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de con-

TOMO VII.—PARTE II.

firmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los promoventes.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toen.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidentes y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.

Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera intervino en la votacion de este amparo, y que por haber fallecido antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma. México, Febrero 8 de 1875.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 8 de 1875.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido por Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, ante el Juzgado 2º de Distrito de México, contra la sentencia del ciudadano gobernador del Distrito, que lo condena á la pena de muerte.*

### PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El promotor fiscal dice: que apesar de los esfuerzos, que con buena inteligencia ha he-

cho el ciudadano defensor del reo Tomás Cuadros ó Joaquín Moreno, para desnaturalizar el delito de asalto y robo, por el que fué procesado y sentenciado, no ha podido el que suscribe asentar á las teorías en que funda sus defensas dicho ciudadano defensor, ya con respecto á la inteligencia de la ley de 3 de Mayo del año anterior próximo pasado; ya atacando dicha ley como privativa, y á la autoridad que con arreglo á ella juzgó y sentenció al quejoso, como tribunal especial; y á procurando invalidar la primera declaración del reo.

Se ha hecho cargo el que suscribe de las cuestiones suscitadas por el defensor, y refiriéndose á la respuesta fiscal fecha 18 de Febrero del presente año, y á la terminante prevención de la ley citada, y á la inteligencia que le dá, en su art. 8º, para la aplicación de la pena que ella designa, concluye el Promotor pidiendo al juzgado, se sirva declarar:

“Que la Justicia de la Union, no protege ni ampara al reo Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, juzgado y sentenciado por el ciudadano gobernador del Distrito, por robo con asalto que verificó en cuadrilla en la casa núm. 27 de la Rivera de San Cosme, la noche del 30 de Enero del presente año, por no haber violacion de las garantías que el reo invoca, y que la Constitucion otorga en los arts. 13, 21 y 23.”

México, Mayo 6 de 1874.—*J. Biviano Beltrán.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

México, Junio 19 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo, promovido por Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, á virtud de reputar violadas en su persona con los procedimientos y sentencia de muerte pronunciada contra el quejoso por el ciudadano gobernador del Distrito, las garantías individuales que otorgan los arts. 13, 21 y 23 de la Constitucion; visto el auto

en que por tratarse de la ejecución de la última pena, se dictó la suspensión del acto; visto el informe respectivo; lo pedido por la parte fiscal; el proveído en que se designó término de pruebas; lo alegado por las partes, y visto en fin lo que verse debía; atendiendo á que la violacion de garantías que se pretende efectuada, se hace consistir por la parte quejosa, en que segun lo expreso en los arts. 13, 21 y 23, al juzgar y sentenciar el gobierno del Distrito en la forma y circunstancias que lo ha hecho, ésto ha sido por leyes privativas y tribunal especial; aplicándosele al quejoso pena propiamente tal, sin ser dictada por autoridad judicial, la mera competente al efecto, y contravieniendo á la abolición de la pena de muerte que establece el art. 23, puesto que el caso no se halla comprendido en las excepciones de ese mismo artículo, y

Considerando primero: que para resolver en el presente juicio, había que investigar previamente, no el que los arts. invocados consignan los expresados principios como garantías individuales, sino si supuesta la suspensión de garantías declarada por la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, aplicada al quejoso, éste se halla ó no comprendido en esa excepcion, y en consecuencia si los procedimientos y sentencia dictada por el gobierno del Distrito, pueden ser causa del otorgamiento de amparo por ataque y violacion de garantías; y

Considerando segundo: que los procedimientos demarcados por la ley reglamentaria de 20 de Enero, así como las demas resoluciones que comprenden diversas circulares y acuerdos en la materia, tienen por objeto, entre otros, expedir á la autoridad judicial federal el conocimiento exacto de los hechos para la aplicación perfecta de la ley: que habiendo en el caso, proveído el juzgado, y segun consta de autos, el tener á la vista la causa original, tanto por creerlo así necesario ó conveniente al esclarecimiento de los hechos, como por haber sido solicitado por las partes como prueba

y dentro del término: que el Gobierno del Distrito, lo que también consta de autos, se opuso á dicha remisión de la causa, no obstante que como la autoridad responsable, no ha debido hacer observaciones, porque tal proceder á mas de ser opuesto á ley expresa (art. 12 de la ley de 20 de Enero de 1869), á resoluciones supremas (circular de 17 de Junio de 1868), lo es también al espíritu y objeto de la institución de los juicios de amparo; y teniendo por último presente, que por el citado art. 12 de la ley reglamentaria, bajo la palabra "Constancias" no se deba comprender, tratándose de documentos, sino todos los que en copia ó originales sirvan al esclarecimiento de los hechos, y sin que esto sea á calificación de la autoridad de quien se solicita tal constancia; que esta ilegal resistencia, no debe ceder en perjuicio y daño del quejoso, ni ser obstáculo para el fallo definitivo, lo que en el caso es patente, puesto que la resolución judicial federal tiene que apoyarse en la calificación de si el hecho porque contra el quejoso se procedió, está comprendido en la ley de 3 de Mayo, y comprobada legalmente su comisión. Por tales consideraciones se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, contra los procedimientos y sentencia de muerte pronunciada por el C. Gobernador del Distrito, por deber reputar en el caso como violadas, las garantías que el quejoso invocó.

Hágase saber, publíquese, previa citación del ciudadano Promotor fiscal elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revisión. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic. José M<sup>a</sup> Canalizo. Doy fé. *Jose María Canalizo.—Fernando Zamora, secretario.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 23 de 1874.  
Visto el juicio de amparo promovido por

Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, ante el juzgado 2º de Distrito de esta Capital, contra la sentencia del ciudadano gobernador del Distrito que lo condenó á la pena de muerte, por creerlo comprendido en la ley expedida en persecución de los plagiarios y saltadores, teniéndolo como uno de los que formaron la gavilla que asaltó en San Cosme la casa del C. Miguel Palacios, la noche del día 20 de Enero del presente año. Visto el informe que sobre el particular rindió el expresado gobernador; lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal y el fallo que pronunció el Juzgado de Distrito amparando al quejoso.

Considerando primero: que antes de dictarse esa sentencia, el quejoso solicitó como prueba, dentro del término legal, que se pidiese y tuviera á la vista la causa original que el ciudadano gobernador lo instruyó, y en cuya virtud lo había condenado á la última pena, á lo cual proveyó de conformidad el juzgado, conforme al art 12 de la ley de 20 de Enero de 1869, y exigió dicha causa al ciudadano gobernador que la tenía.

Considerando segundo: que este funcionario se negó á remitirla, manifestando que solo remitiría el testimonio de las diligencias conducentes, por lo que el Juez de Distrito pasó personalmente á extraerla de la oficina respectiva, sin poder conseguirlo por la resistencia que opuso el gobernador.

Considerando tercero: que el artículo de la ley en que el juez se apoyaba para pedir la causa, se expresa en estos términos: "Toda autoridad ó funcionario tiene obligación de proporcionar con la oportunidad necesaria, las constancias que á pedimento de la parte se le pidieren," y que por lo mismo era indeclinable el deber que tenía el Juez de Distrito, para pedirlo que la parte legítima solicitaba como constancia, y el Gobernador para remitirla.

Considerando cuarto: que esta Suprema Corte al revisar la sentencia de que se trata, estimó que no se había cumplido por parte del ciudadano gobernador, con la obligación

que le imponía el citado artículo de la ley orgánica sobre amparos, y que el juez había fallado sin proporcionar al quejoso las constancias que, conforme á un derecho innegable, pedía se tuviesen presentes; lo cual también daba por resultado, el que la Corte no pudiese formarse acerca del particular, un juicio completo y conciensudo, por lo que dispuso, no juzgando el asunto en estado de fallar, que de nuevo exigiera el juez al gobernador la causa original que solicitaba el quejoso.

Considerando quinto: que á pesar del mandato de la Corte, repetido una y otra vez, y nunca obsequiado por el gobernador, pues que éste en vez de mandar la causa original, remitió unas diligencias que aseguran el testimonio que ha sacado de aquella, que por no habérselo pedido tuvo que devolvérsele sin considerarlo en manera alguna, so barronaba la ley y no se obsequiaban sus determinaciones; que no quedaba en tales circunstancias al Supremo Tribunal, otro arbitrio para hacerse obedecer que pedir el auxilio de la fuerza armada que el pueblo mexicano sostiene á fin de que apoye á los poderes federales.

Considerando sexto: que el Ejecutivo que la tiene á sus órdenes, precisamente para emplearla como lo previene la Constitución, se ha negado á verificarlo con alegaciones inadmisibles á juicio de la Corte, cuando bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, se solicitaba la acción de la fuerza material, en uso de reconocidas funciones del poder judicial, que no pueden estar sujetas al examen y calificación de otro poder.

Considerando séptimo: que si bien notorias, rudimentarias é incontrovertibles las anteriores razones, como de hecho la Suprema Corte no dispone de la fuerza armada para llevar adelante sus determinaciones, habiéndosele negado, no le queda otro arbitrio que sostener su derecho, no prestándose á que se menoscaben sus atribuciones.

Considerando octavo: que si este tribunal consintiera en que otro poder califique en

qué casos puede el judicial hacerse obedecer y en cuales no, nulificaría la independencia tan necesaria á este poder.

Considerando noveno: que en virtud de lo expuesto, aunque la Suprema Corte hubiera comprendido y manifestado que sin los datos suficientes no podía fallar como lo deseaba, sin embargo, hallándose en la imposibilidad material de hacer cumplir los mandatos de la ley, debe sentenciar como le sea dable, pues nunca, mientras esté en su mano, dejará de administrar la justicia que le encomienda la Constitución, y no podía por tanto, consentir en que quedase sin resolución el caso presente.

Considerando décimo: que bajo tales conceptos, se ha negado al quejoso un medio de defensa que el juzga decisivo, que la ley de una manera terminante le concede, y se lo rehúsa por la autoridad que lo condenó, no dudando para no proporcionárselo, hasta desobedecer abiertamente lo mandado por la Suprema Corte, lo cual en justicia y en equidad, nunca debe redundar en perjuicio de quien reclama nada ménos que su vida garantizada por el Código fundamental de la República, siendo por lo mismo de presumirse, que efectivamente será favorable el dato que pide el quejoso, y de sostenerse que es rebelde quien tan injustamente se niega á proporcionárselo.

De conformidad con los principios del derecho, que en caso de duda y más aun en caso de rebeldía negativa de quien debe proporcionar los datos bastantes y no lo hace, se ha de estar á lo mas favorable al reo principios que ha reconocido y obsequiado la Suprema Corte de Justicia en casos semejantes como el ocurrido con el Juez de Distrito de Zacatecas y el Gobernador de aquel Estado. Este tribunal falla, en cumplimiento del artículo 101 de nuestra Constitución política y con fundamento del art. 12 de la ley de 20 de Enero de 1869, y confirmando la sentencia del Juzgado 2º de Distrito de esta capital lo siguiente:

Primero: La Justicia de la Union ampara y protege á Tomás Cuadros, contra la sentencia del gobernador del Distrito que lo condenó á muerte juzgándolo como salteador.

Segundo: Queda dicho Cuadros consignado á los Tribunales ordinarios, para que lo juzguen conforme al derecho comun.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio Altamirano*.—*L. Velázquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 7 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por María Refugio Casillas á favor de su hermano Pedro Casillas, contra el jefe político de la capital de ese Estado, por la consignación que hizo de aquel al batallón núm. 24.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

María Refugio Casillas, se queja de que su hermano Pedro fué aprehendido en esta

ciudad el día 16 de Setiembre último, por disposición del ciudadano jefe político de la capital, quien lo consignó al servicio militar en el batallón núm. 24, por cuyo hecho creo violada en la persona del segundo, la garantía que protege el art. 5º de la Constitución general.

Aunque se decretó la suspensión provisional del acto reclamado, como el ciudadano general en jefe de la tercera division informara que el peticionado Casillas es desertor del 4º cuerpo de caballería, segun su propia declaracion, la consignación de la autoridad política y el informe del ciudadano administrador de la hacienda del Maguey, aquella quedó sin efecto, recibiendo en seguida informe del ciudadano jefe político de la capital que manifiesta no haber habido por su parte violación de garantías puesto que se limitó á aprehender á una persona acusada de un delito, consignándola á la autoridad respectiva.

Sin embargo, la quejosa insiste en el recurso, asegurando que su hermano Pedro Casillas jamas ha servido en el ejército, y por tanto no es reo del delito de desercion; aña, diciendo, que ademas de haberse excusado o cumplimiento [de la orden de suspensión provisional del acto reclamado, su peticionado hermano hasta 1º de Octubre tenía seis dias de estar preso, sin haberse pronunciado en su sentencia el auto motivado, segun lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución.

Si no faltan motivos para creer que en efecto por parte de la autoridad militar, se suponga el hecho de la desercion y se procure estorbar el libre ejercicio del recurso, empleando medios de severidad contra el quejoso, como respecto de su consignación al ejército, hay indicios bastantes para presumir que alguna otra vez ha pertenecido á él, y por lo que respecta á su detención, no se queja en forma, ni es tiempo de oír sobre el particular á la autoridad responsable, y el que suscribe debe pedir sobre lo principal, conforme al final del art. 9º de la ley